

LA GEOGRAFÍA DE LA POLARIZACIÓN: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y POBREZA EN CHIAPAS

Daniel Villafuerte Solís*
María del Carmen García Aguilar*

Introducción

En los últimos años asistimos a una serie de transformaciones en la economía, en la sociedad y en el mundo rural chiapaneco que están alterando la función de los espacios que anteriormente eran predominantemente rurales: la política, la economía y la sociedad se movían con el tiempo marcado por el medio rural. Buena parte del quehacer de las instituciones estaba volcado a la atención de los problemas del campo. Hoy, por el contrario, a pesar de su situación crítica, se ha convertido en marginal, no se alientan procesos que abonen a la reactivación de la producción, a la mitigación de los efectos del cambio climático, a recuperar la centralidad en la producción de alimentos y a elevar la calidad de vida de miles de campesinos que hoy están engrosando las filas de migrantes indocumentados, de los que padecen hambre y de los excluidos.

Hoy estamos frente a una nueva geografía, la de la polarización: en la agricultura coexiste la economía campesina de autosubsistencia junto con las actividades de plantación orientadas al mercado nacional y la exportación; algunos de los productos emergentes como la palma africana son resultado de la estrategia gubernamental de “reconversión productiva” que concluyó en diciembre de 2012. En el sector secundario, la industria manufacturera es sumamente precaria, predominando los pequeños establecimientos dedicados a la transformación de algunas materias primas (beneficios de café, molinos de nixtamal, panaderías, entre otros). En el sector terciario también se observa el predominio de pequeñas unidades económicas de carácter familiar; sin embargo, están creciendo los establecimientos medianos y grandes, que

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

emplean una parte significativa de trabajadores. Estas empresas corresponden a firmas transnacionales —Wall-Mart y sus filiales, instituciones financieras— y al gran capital nacional —Liverpool, Soriana—, que se han establecido en los principales centros urbanos de la entidad y que fomentan el consumo de productos globalizados. En años muy recientes, han proliferado pequeños establecimientos comerciales con una estrategia que está aniquilando rápidamente a los pequeños negocios familiares locales. Nos referimos a la red de tiendas Oxxo, en cuya página de Internet se lee: “somos la cadena de tiendas de conveniencia más grande de América Latina, y también la más importante. Contamos con más de 6,000 tiendas y, en promedio, cada día abren sus puertas dos nuevos establecimientos”.

Otro de los rasgos de la nueva polarización es la emigración hacia los Estados Unidos, producto de la descomposición de las economías campesinas y de la ausencia de mercados laborales amplios y dinámicos en Chiapas. La precariedad laboral es resultante de la historia económica de los últimos cincuenta años, pero de manera destacada de la implantación de las políticas neoliberales de las dos décadas recientes, así como del tránsito de una economía rural a una de carácter más urbana, centrada en el comercio y los servicios. Esta emigración arrastra a amplios sectores de la población campesina e indígena, cuya experiencia está impactando a sus comunidades de origen en los ámbitos de la cultura comunitaria, la economía y la política.

Al tiempo que Chiapas pasa a formar parte de los estados con migración internacional, se convierte en un espacio de intensos flujos migratorios transnacionales provenientes de Centroamérica, y en los últimos años de algunos países sudamericanos y caribeños como Ecuador y Cuba, e incluso de países asiáticos. Su carácter de estado fronterizo convierte a Chiapas en un territorio de tránsito de flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Esta característica hace más compleja la realidad social, al establecerse redes migratorias que se conectan y convierten a la migración en un fenómeno dinámico, donde participa una diversidad muy amplia de actores.

La exposición está dividida en tres partes: en la primera se abordará la polarización, la desigualdad y la violencia; en la segunda hablaremos en torno a la debilidad de la economía rural, y en la tercera sobre migración, precariedad laboral y pobreza. Al final, a manera de conclusión, haremos un ejercicio analítico estableciendo la articulación entre las tres partes, cada una con su propia complejidad, procurando tener una visión de conjunto.

Polarización, desigualdad y violencia

Hace algunos años, antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se hablaba de la existencia de un país que caminaba a dos velocidades: el México del norte y el México del sur. Hoy, a dos décadas de la puesta en vigor del TLCAN, se puede afirmar que existe una nueva geografía donde por lo menos existen tres grandes regiones bien diferenciadas por la inversión y la generación de riqueza, expresada en términos del producto interno bruto (PIB), la desigualdad social y la pobreza: el norte, el centro y el sur.

En la era del posTLCAN comenzamos a vivir una situación de profunda polarización económica, desigualdad social y precarización laboral que afecta no sólo a las regiones de mayor industrialización relativa, sino también a los estados con fuerte presencia de economía campesina cuya relación con el mercado era marginal, lo cual es un indicador del nivel de deterioro económico y social que enfrentan hoy millones de productores rurales, y que muchos de ellos decidieron abandonar sus parcelas para emprender el viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. En el sur, Chiapas y Veracruz constituyen los ejemplos más claros de esta situación, estados donde históricamente su sector agropecuario había sido importante, principalmente en la producción de café, caña de azúcar, maíz y ganado bovino, productos que se han visto seriamente afectados por la apertura comercial y la política de desregulación económica.

Las asimetrías regionales se pueden observar en el cuadro 1, donde se presenta la geografía de la generación del PIB: en tres estados del norte, en dos entidades del centro y en seis del sur. Este ejercicio cartográfico permite ver de manera clara y sencilla la preponderancia del norte y centro en la dinámica económica del país, a pesar de no contar con la dotación de recursos estratégicos que tiene el sur: agua, energía hidroeléctrica, petróleo, gas y biodiversidad, entre otros. En términos gruesos tenemos que Baja California, Chihuahua y Nuevo León juntos aportan en promedio 14% del PIB nacional; el Distrito Federal y el Estado de México concentran más del 27%; en tanto que seis estados del sur sólo contribuyen con el 13%, porcentaje que podría ser mucho menor si se dejara de contabilizar el valor que genera el petróleo, sobre todo en los estados de Campeche y Tabasco donde su contribución al PIB estatal es de 80% y 45% en promedio, respectivamente. Estos datos revelan la asimetría que guardan las regiones en el país y que tiene que ver con su propia historia, con la política de los gobiernos federal y estatal, con la dotación diferenciada de infraestructura de comunicaciones y transportes, así como su cercanía con los Estados Unidos, elemento fundamental en las decisiones

de localización del capital. La instalación de la industria maquiladora ilustra muy bien esta situación.

Cuadro I. PIB en millones de pesos a precios de 2003 en valores básicos

País/ estados	2003	2004	2005	2006	2007	2008
País	7 162 773.3	7 454 147.9	7 698 196.7	8 070 232.9	8 348 396.2	8 475 564.4
NORTE	976 045.6	1 030 501.5	1 073 848.8	1 140 441.3	1 195 175.1	1 205 656.0
Baja California	216 923.4	228 527.4	237 265.9	249 268.7	255 548.4	255 693.4
Chihuahua	237 889.7	250 271.1	259 192.1	274 144.4	283 457.1	284 410.0
Nuevo León	521 232.5	551 703.0	577 390.8	617 028.2	656 079.6	665 552.6
CENTRO	1 971 024.7	2 040 448.5	2 110 055.8	2 209 723.9	2 290 607.2	2 319 634.8
Distrito Federal	1 325 151.6	1 368 286.9	1 404 694.1	1,465 617.0	1 514 745.3	1 525 337.7
Estado de México	645 873.1	672 161.6	705 361.7	744 106.9	775 861.9	794 297.1
SUR	986 116.6	1 012 240.5	1 037 298.2	1 056 686.2	1 056 304.3	1 066 013.6
Campeche	350 828.2	350 687.7	345 803.4	341 663.4	324 438.8	316 908.0
Chiapas	141 806.1	140 875.7	145 397.2	149 589.2	146 221.4	153 062.1
Guerrero	116 408.8	121 374.7	124 519.2	126 080.1	132 329.8	130 470.7
Oaxaca	113 735.3	119 158.6	122 149.7	122 749.8	125 126.7	128 978.5
Tabasco	170 381.7	177 256.4	191 910.7	203 289.2	207 859.1	216 032.1
Yucatán	95 956.5	102 887.4	107 516.0	113 314.5	120 328.5	120 562.2

Fuente: INEGI, 2010.

En este contexto se ubica Chiapas, cuya contribución a la generación del PIB del país es inferior al 2%, ocupando el lugar diecinueve en el conjunto de las entidades federativas. Para tener una perspectiva más clara de la aportación del estado en el conjunto del país, es importante señalar que en 1970 Chiapas se encontraba en el sitio dieciséis, incluso en 1980 escaló al lugar número once pues en ese año

su producción de petróleo, gas y azufre llegó a ocupar un lugar importante en la producción nacional (INEGI-PNUD, 1986). En esos años los recursos provenientes de la generación de energéticos, incluida la electricidad, no fueron aprovechados para impulsar la industrialización, el campo siguió profundizando su misma estructura productiva y lo que se obtuvo al final, cuando el petróleo dejó de ser relevante, fue una progresiva descapitalización que condujo a la crisis de la agricultura, particularmente del sector campesino.

Otra manera de valorar la importancia relativa de Chiapas en el conjunto del país es a través del PIB por persona. En este indicador Chiapas ocupa el último lugar, seguido, en escala ascendente, por Oaxaca y Guerrero. Así, mientras en Chiapas el PIB *per cápita* se situaba en 33 000 pesos, en el Distrito Federal era de 159 mil pesos y en Nuevo León de 136 000.¹ La pregunta obligada es: ¿Por qué después de muchos años de haber aportado al país alimentos baratos, materias primas, electricidad, petróleo y gas, Chiapas se mantiene a la zaga en los indicadores económicos y sociales básicos? Ya se ha vuelto un cliché en los discursos políticos, incluso académicos, decir que la entidad sigue ocupando los primeros lugares en rezago social; sin embargo, muy pocas veces se cuestionan las causas profundas de que se mantenga esta situación, mucho menos todavía se plantea un proyecto que permita cambiar la realidad económica, social y política.

El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cuestionó e hizo visible las condiciones de vida de los indígenas chiapanecos y planteó el camino de la autonomía para superar las condiciones de sumisión y explotación. Sin embargo, han pasado dos décadas de aquel memorable acontecimiento sin que la situación en Chiapas haya cambiado sustancialmente. Es posible que las relaciones en la llamada área de influencia zapatista hayan cambiado de algún modo: uno de los enemigos de clase prácticamente desapareció del mapa agrario, nos referimos a los grandes propietarios de tierras, particularmente los ganaderos; surgieron nuevos intermediarios entre el Estado y la población indígena, sobre todo organismos no gubernamentales; con el paso de los años el gobierno fue penetrando poco a poco en los espacios que antes estaban reservados a las organizaciones de la sociedad civil. En la zona de Montes Azules fue muy claro el protagonismo del gobierno federal en estrecha colaboración con el gobierno de

¹ Estos cálculos se realizaron con datos reales del PIB de 2005 —a precios constantes de 2003— y la población resultante del *Conteo de población 2005*. Los datos no cambian para 2010; el cálculo para este año a partir del censo de población y vivienda y de las cuentas nacionales del INEGI arroja la cifra de 32 765 pesos.

Chiapas, lo que permitió la reubicación de algunas poblaciones.² Sin embargo, el fenómeno más relevante que hoy está presente en varios municipios de influencia zapatista son las tensiones que casi cotidianamente se observan entre bases de apoyo y organizaciones que no simpatizan con la causa zapatista: las comunidades de Agua Azul, El Pozo, Peña Limonar y Amaitik son algunos ejemplos representativos del nivel de conflictividad que ha costado la vida a varios campesinos. En una nota de un diario local, a propósito de la visita de la Brigada Europea de Solidaridad con las y los Zapatistas, integrantes de la comunidad de Oventic expusieron: “Resistimos rechazando las ayudas del gobierno, pero también organizando mejor nuestra autonomía: la escuela y la salud, entre otras, son áreas de trabajo con las que resistimos. Nos cuesta, pero queremos demostrar al gobierno que somos capaces de vivir y hacer las cosas solas y solos” (*Cuarto Poder*, 12 de julio de 2010).

Al finalizar la primera década del siglo XXI los problemas estructurales que padece Chiapas, agravados por la crisis económica, no parecen tener visos de ser superados. En doce años de gobierno de alternancia los niveles de marginación y pobreza siguen siendo el rasgo distintivo de la entidad, manteniéndose en el primer lugar nacional. Hoy se puede palpar una erosión del tejido social en varios puntos de la geografía chiapaneca, que se evidencia en los niveles de violencia y conflictividad entre grupos de distinta filiación política y religiosa. Un ejemplo es el caso de la localidad de Mitzitón: una comunidad dividida por la religión y por posiciones políticas distintas, un grupo adherente a *la otra campaña* y otro unido al Ejército de Dios, Alas de Águila, de filiación protestante, se disputan el espacio.³

Esta polarización también se observa en los enfrentamientos que desde hace algunos años comenzaron por el control de las cascadas de Agua Azul. El ejido San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón, está envuelto en una profunda división entre simpatizantes zapatistas y ejidatarios oficialistas. En la comunidad de San Marcos Avilés, del mismo municipio, también se registran fuertes tensiones

² Las reubicaciones ocurrieron durante la administración del gobernador Pablo Salazar (2000-2006), particularmente durante la segunda mitad. Para profundizar en este tema véase el libro de Ascencio (2008).

³ Hermann Bellinghausen, enviado del diario *La Jornada*, hace la crónica del conflicto y recoge el siguiente testimonio: “Ya no estamos dispuestos a seguir aguantando. Estos avecindados llegaron a vivir en nuestra comunidad y ahora quieren aprovechar nuestros bosques y tierras, pero no cooperan, no cumplen los acuerdos comunitarios, no hacen trabajos colectivos, no asisten a las asambleas, no son ejidatarios, y en cambio trafican con personas, hostigan y amenazan; están armados, mataron a nuestro compañero Aurelio, atropellando a otros cinco compañeros; secuestraron a nuestro agente y su policía junto con otro compañero, y los torturaron gravemente” (*La Jornada*, 7 de julio de 2010).

entre bases zapatistas y grupos contrarios al proyecto de autonomía. Desde 2010 en la comunidad se han enfrentado grupos antagonicos, donde están involucrados miembros de los partidos PRI, PVEM y PRD; la fuente de conflicto es el despojo de tierras de labor. Caravanas de observación han estado en el lugar y han hecho recomendaciones sin que hasta ahora hayan tenido respuesta por parte de las autoridades. Lejos de estar en presencia de propuestas de reconciliación, pareciera que se apuesta a un proceso de descomposición social, a un juego de resistencias, a la indiferencia. Un ejemplo en este sentido es el asesinato de Juan Vázquez Gómez, dirigente de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona, ocurrido el 24 de abril de 2013.

Chilón es de los municipios más pobres de Chiapas, con población mayoritariamente indígena. De la población con edad de tres años y más, que en el Censo General de Población y Vivienda 2010 sumó 100 167 personas, el 96.4% habla lengua indígena, y de éstas un 46.5% no habla español. Es notorio el predominio de la población joven, donde el grupo de 5 a 19 años representa el 46.2%. Este municipio forma parte del “selecto” grupo de los siete más pobres de Chiapas, además de aportar el mayor número de personas con hambre, alrededor de 57 000, con lo que ha obtenido su pase de entrada a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este contexto ha derivado en una dinámica migratoria, donde muchos de estos pobladores se han vinculado al mercado laboral de la industria de la construcción en el estado de Quintana Roo, específicamente en Cancún y Playa del Carmen. En este marco se entiende que la disputa por las Cascadas de Agua Azul es vital, pues de acuerdo con las estimaciones de Libert (2012) este punto de atracción turística deja una derrama económica anual de once millones de pesos.

Un ingreso considerable para los pobladores de Agua Azul proviene de la caseta de cobro a la entrada a la zona turística, en la cual se cobra 10 pesos por persona. Los ingresos generados por este proyecto ecoturístico inspiraron a los ejidatarios vecinos de San Sebastián Bachajón a acordar en asamblea ejidal la instalación de su propia caseta de cobro, en el desvío que lleva hacia Agua Azul y cruza su territorio. La existencia de dos casetas de cobro, y la disputa alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, ha llevado a una serie de conflictos sociopolíticos sumamente fuertes, con el saldo de personas muertas o gravemente heridas, o encarceladas y torturadas. Recientemente, la caseta de cobro manejada por los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes

a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona lanzada por el EZLN en 2005, fue violentamente desalojada por parte de pobladores de Agua Azul y priístas de Bachajón. Este choque violento que se dio el 2 de febrero de 2011 fue la excusa perfecta para la intervención policiaca y militar del gobierno estatal y federal, quien ahora se presenta como mediador y se propone para gestionar una caseta de cobro única, cuyos beneficios serán distribuidos entre los dos poblados de Agua Azul y San Sebastián Bachajón (Libert, 2012: 215).

Las tensiones y conflictos constituyen síntomas de un problema más profundo provocado por la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Incluso puede verse cómo en este contexto resurgen viejos problemas como el de la comunidad de Venustiano Carranza. El telón de fondo es la tierra, la base económica, y el control político. El agravio, el engaño de líderes políticos y religiosos son los ingredientes que han abonado al fértil terreno de la anomia social.

A partir de septiembre de 2012 se observa una reactivación del viejo conflicto en Carranza, que desde sus inicios y hasta fechas recientes ha costado la vida de 52 comuneros. En 1995 la comunidad recibió títulos de propiedad por 72 000 hectáreas, de las cuales la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) controla 52 000 y el resto se encuentra en manos de diversos grupos que han sido expulsados de esta organización por diferencias internas desde 1985. En mayo de 2013 el conflicto entre comuneros de la Casa del Pueblo y disidentes se tornó violento, dejando un saldo de dos personas muertas y veinte casas quemadas. A este respecto un diario local informaba: “cerca de mil policías estatales, apoyados por agentes federales y efectivos de la Marina y del Ejército, retomaron el control en este poblado y retiraron barricadas [...]” (Henríquez, 2013).

Otra tensión permanente, que de vez en vez se polariza por acciones u omisiones de los gobiernos federal y estatal, se refiere al caso Acteal. En abril de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad de quince inculpados en los hechos, quienes habían sido condenados a 36 años de prisión.

En marzo de 2013 se difundió en los medios impresos y electrónicos la conformación de grupos armados de autodefensa en la Sierra de Chiapas. Sin embargo, el comisariado ejidal de El Carrizal, municipio de Motozintla, declaró que efectivamente se había dado una reunión con representantes de siete comunidades de este municipio pero con la finalidad de manifestarse en contra de la explotación minera: “estamos en contra de las altas tarifas de cobro por parte de la Comisión Federal de Electricidad, reclamamos obras y proyectos que

favorezcan el desarrollo social del municipio, pero no somos un grupo armado” (Mondragón, 2013).

Otro viejo conflicto reactivado es el caso de los Chimalapas —San Miguel y Santa María—, municipios que desde la Colonia pertenecían a Oaxaca pero en cuya demarcación territorial los intereses de poderosas empresas madereras generaron un traslape de resoluciones presidenciales que complejizó el caso. Cinco empresas forestales tenían desde los años cincuenta del siglo XX permisos para explotar cien mil hectáreas por veinticinco años. Estas empresas fueron expulsadas por los comuneros en 1977. El conflicto, que había permanecido relativamente soterrado, en los últimos años se reactivó por la decisión del gobierno chiapaneco de Juan Sabines Guerrero de crear el nuevo municipio “Belisario Domínguez”⁴ que invade más de 164 000 hectáreas de territorio oaxaqueño, lo que generó controversias constitucionales del gobierno y municipios afectados de Oaxaca (Aranda y Vélez, 2012). El 21 de diciembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las controversias, con lo que dejó sin efecto todas las acciones que implicaba el decreto de creación del nuevo municipio. El 22 de diciembre del mismo año se suscribió el Acuerdo de Distensión Integral para Garantizar la Paz y Tranquilidad en Los Chimalapas, con la presencia, como testigos, del secretario de gobernación y los gobernadores de Chiapas y Oaxaca.

Por otra parte, en noviembre de 2012, en el municipio de Teopisca, un viejo conflicto agrario se reavivó con un enfrentamiento entre dos grupos que se disputan alrededor de mil hectáreas en la comunidad de Tzajalá, con un saldo de veinte lesionados y ochenta desplazados. Uno de los grupos obligó a varias familias de la referida comunidad a abandonar sus viviendas y algunas de ellas fueron quemadas.

Por las mismas fechas fue herido con arma de fuego el presidente del municipio de El Bosque junto con tres acompañantes. En mayo de 2013, en Petalcingo, municipio de Tila, una persona resultó muerta a balazos y seis heridas por disputas de tierras; la casa ejidal y la biblioteca fueron incendiadas.

La violencia se ha recrudecido, diversas manifestaciones se han dado en los últimos meses de 2013 por el creciente número de mujeres asesinadas en distintos puntos de la geografía chiapaneca. Por otra parte, en el municipio de Chamula se

⁴ Decreto 008 emitido por la LXIV Legislatura de Chiapas, publicado en el Diario Oficial del Estado de Chiapas el 23 de noviembre de 2011. El nuevo municipio se crea en el poblado Rodulfo Figueroa, integrando núcleos agrarios ejidales chiapanecos asentados en tierras oaxaqueñas y propiedad de los Chimalapas.

han registrado dos actos de linchamiento: uno el 7 de abril, donde un joven que participó en el robo de un taxi fue quemado vivo, y otro registrado el 4 de junio, cuyo móvil fue la violación y muerte de una joven indígena. Este último caso dio la vuelta al mundo a través de YouTube: en el video aparecen dos hombres golpeados y quemados, un tercero fue llevado a un hospital de San Cristóbal de Las Casas, donde días después murió por las quemaduras sufridas en todo su cuerpo.

Este breve recuento es sólo una muestra de la conflictividad que se está haciendo “normal” en Chiapas, cuyas raíces profundas están en el olvido, el abandono, la crisis económica, social y política, así como en una amplia y prolongada crisis institucional que se refleja en la ausencia de conducción gubernamental en temas y problemas altamente sensibles. El mapa de conflictos cada vez se extiende hasta cubrir áreas que antes vivían en relativa calma.

¿Qué está haciendo el gobierno de Chiapas para superar las carencias de los sectores más pobres del estado? Además de los programas normales del gobierno federal y estatal, en 2007 estableció en el Plan de Desarrollo la atención a los municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).⁵ En su diagnóstico parte de reconocer que “la marginación y pobreza son producto de la inequitativa distribución de riqueza y oportunidades entre las sociedades y las regiones, que privan a los ciudadanos de sus libertades y capacidades, alejándolos de los beneficios del desarrollo socioeconómico y humano” (Secretaría de Desarrollo y Participación Social, 2010).

Esta iniciativa se inscribe dentro de la política del gobierno federal establecida en el Plan Nacional de Desarrollo: “La estrategia está orientada a dar atención a los 125 municipios del país que tienen los mayores rezagos en marginación, pobreza y desarrollo humano, diseñada para el desarrollo social y económico de estos municipios, implementada desde enero de 2007, *busca atender necesidades muy básicas, elementales para promover una sociedad más igualitaria*, donde viven más de un millón de mexicanos que son los más pobres entre los más pobres” (Secretaría de Desarrollo y Participación Social, 2010. Las cursivas son nuestras).

⁵ María del Socorro Zavaleta Cruz, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Chiapas, refirió que la inversión es fuerte y con resultados tangibles: “en este año se aplican en el combate a la pobreza en los 118 municipios alrededor de 8 mil 300 millones”, y mencionó algunos de los programas: Estancias infantiles, 70 y Más, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias —suponemos que se refiere al que se aplica para los 28 municipios—, pisos firmes, empleo temporal, 3 x 1 para migrantes, rescate de espacios públicos, Hábitat, vivienda, coinversión social, apoyo para regularizar asentamientos humanos, entre otros (*El Heraldillo de Chiapas*, 24 de julio de 2010).

Es así que a partir de la segunda mitad de 2007 el gobierno de Chiapas comienza a elaborar una estrategia para atender a veintiocho municipios con menor IDH.⁶ No está del todo claro el criterio de elección, pues en Chiapas existen muchos municipios con un IDH bajo que no están incluidos en la lista —por ejemplo, ninguno de la región Sierra⁷ está anotado—, por lo que todo parece indicar que los elementos que definieron la elección fueron la condición étnica y el nivel de conflictividad que presentan. En este sentido, los datos del Censo de Población 2005 revelan que el 89% de la población de cinco años y más de los municipios prioritarios habla lengua indígena; incluso podemos encontrar un selecto grupo de municipios donde más del 99% habla lengua indígena: Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Mitontic, San Juan Cancuc y Larráinzar.

La población de los veintiocho municipios prioritarios presenta un patrón de asentamiento donde predomina la dispersión en muchas localidades, por arriba del promedio estatal, como se puede apreciar en el cuadro 2.

Cuadro 2. distribución de la población en Chiapas y en los veintiocho municipios con más bajo IDH, según rangos de localidades seleccionadas

Rangos de localidades	Número de localidades	Población
Total Chiapas	19 386	4 293 459
De 1-49 habitantes	12 561	138 603
De 50-99 habitantes	1785	129 984
De 100-499 habitantes	3681	840 196
Subtotal	18 027	1 108 783
Total 28 municipios	2537	638 062
De 1-49 habitantes	779	16 700
De 50-99 habitantes	438	31 910
De 100-499 habitantes	977	223 923
Subtotal	2194	272 533

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, 2006. *Censo de población 2005*.

⁶ Ocoatepec, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Mitontic, Pantelhó, Zinacantán, Aldama, Santiago El Pinar, Pantepec, San Andrés Duraznal, Francisco León, Chilón, San Juan Cancuc, Sitalá, Tumbalá, Amatenango del Valle, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Amatán, Sabanilla, Huitiupán, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Salto de Agua y Tenejapa.

⁷ Bejucal de Ocampo, El Porvenir y Siltepec, por citar algunos ejemplos de la Sierra, presentan las mismas condiciones que el municipio de Sabanilla.

Del cuadro 2 se pueden desprender varias observaciones para la reflexión sobre los alcances de una política de focalización propuesta por el gobierno federal y estatal. En primer lugar, que el universo de población atendida únicamente representa, en números redondos, 15% de la población estatal distribuida en el 13% de las localidades,⁸ lo que a todas luces resulta insuficiente si tomamos en cuenta que la mayoría de los municipios presentan altos niveles de pobreza y marginación. Hay un dato muy revelador de la extrema pobreza que padece una parte significativa de la población chiapaneca que se refiere justamente al número de familias beneficiadas por el programa Oportunidades y que en 2009 llegó a 560 047 (INEGI, 2010c), lo que equivale al 60% de las familias registradas por el *Conteo de Población 2005*. Para el 2011 el número de familias atendidas por dicho programa subió a 618 795 familias, equivalente al 62% del total de familias (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2012).

Asimismo, como se puede observar en el cuadro 2, el nivel de ruralidad de los veintiocho municipios es casi del doble en relación con el promedio del estado, lo que plantea retos importantes en materia de generación de empleos. Tenemos, por ejemplo, que mientras en la entidad en las localidades de 1 a 499 habitantes se agrupa el 25.8% de la población, en los veintiocho municipios prioritarios la proporción es del 42.7%, lo que marca una diferencia sustancial.

En estricto sentido, no hay razón suficiente para incluir en la lista de prioridades de la política social a sólo veintiocho municipios pues por lo menos el 80% presenta altos niveles de marginación y pobreza. Por ello, más bien debiera pensarse en una estrategia más que focalizada en una atención universal de la población. Es decir, correspondería invertir los términos: considerar a noventa municipios como altamente prioritarios y dejar veintiocho con programas normales. Desde luego, esto implicaría elevar cuatro veces el presupuesto. Por otra parte, como se puede leer en las declaraciones de la delegada de la SEDESOL en Chiapas (ver nota 5), hay una impresionante lista de programas diseñados para combatir la pobreza: habla de una inversión de 8300 millones de pesos para 2010, pero habrá que ver cuánto de este recurso se destina a la operación de cada programa y cuánto llega a la gente necesitada, así como también el costo de cada programa y su eficacia.

El programa Cruzada Nacional contra el Hambre incluye a 55 municipios, prácticamente el doble de los considerados en el gobierno anterior. Esto es un

⁸ Hay que señalar, sin embargo, que la población de los 28 municipios más pobres de Chiapas representa alrededor del 60% de la población de los 125 municipios con menor IDH considerados por el gobierno federal.

reconocimiento de la gravedad de la situación social de Chiapas y de la poca eficacia de los programas instituidos: el gobierno federal erogó en 2011 la cantidad de 5991 millones de pesos en el programa Oportunidades (Sexto Informe de Gobierno, Anexo estadístico) y el presupuesto ejercido por el gobierno del estado para el mismo año en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, en lo que respecta a erradicación de la pobreza y el hambre, fue de 6560.9 millones de pesos (Gobierno del Estado de Chiapas, 2012).

Lo que resulta claro es que la población rural representa el mayor reto, no sólo por constituir la mayoría en el estado, sino también porque es allí donde las carencias materiales son mayores, acusa mayor rezago social y el nivel de conflictividad es muy alto. Si se toma como criterio para definir lo rural a la población que vive en las localidades menores a diez mil habitantes, tendríamos que el 70% de la población chiapaneca era rural; pero aun si tomáramos el criterio más conservador, que es el de localidades inferiores a los 2500 habitantes, veríamos que la población rural de Chiapas representó el 57.4% en 2005 y el 51.3% en 2010, es decir, 2 469 000 habitantes. Esto quiere decir que el proceso de desruralización en la entidad ha caminado muy lento y por lo cual muchos de los problemas que se presentan tienen su origen en los espacios rurales.

La débil y maltrecha economía rural

La economía del sector agropecuario, a pesar de su escasa contribución al PIB, sigue siendo clave en la estabilidad social y política, por ello resulta contradictorio que la política de desarrollo rural y agrícola no tenga la suficiente fuerza y claridad para remontar los problemas fundamentales de la producción y de los productores rurales, sobre todo en el amplio sector de los campesinos. Veamos algunos datos para contextualizar la magnitud de los retos que hay que enfrentar: se estima que existen alrededor de 460 820 productores rurales, de los cuales dependen 1 463 983 personas (INEGI, 2008b), de éstas el 57.5% son menores de 18 años que en futuro próximo demandarán tierras, trabajo o se irán a trabajar a los Estados Unidos. En otras palabras, tenemos 1 924 803 personas que dependen directamente de la actividad agropecuaria, cifra que equivale a cerca del 44% de la población del estado.⁹ Esto proporciona una primera idea del tamaño del problema no sólo del campo, sino del desafío que enfrenta la sociedad chiapaneca.

⁹ Suponiendo que la población de Chiapas para el año 2007 fue de 4 400 000 habitantes.

Durante el periodo 2003-2008, la economía chiapaneca creció en términos reales —medido a partir del Producto Interno Bruto— en un 1.5%, lo que a todas luces resulta insuficiente para generar empleos para una población en ascenso. Por sectores se observa un crecimiento diferencial: el sector primario apenas registró una tasa promedio anual del 0.9%, lo que refleja un bajo desempeño de las actividades agropecuarias y forestales, que desde años atrás arrastran un problema de producción y productividad que, aunado a los bajos precios de los productos más significativos, han provocado la emigración hacia las ciudades más importantes del país y a los Estados Unidos. El sector secundario ha sido el que ha presentado la peor actuación que se reflejó en una tasa promedio anual del -2.7%. Por el contrario, el sector terciario registró un crecimiento anual de un 3.4%, muy por arriba del promedio del PIB global. De esta manera, el comercio y los servicios se convierten en los motores de la economía de la entidad, así como del empleo.¹⁰

En otras palabras, Chiapas vive una situación económica que no contribuye a resolver los grandes problemas sociales: la marginación, la pobreza, la exclusión social y el desempleo. Tenemos un campo erosionado y debilitado por el contexto de apertura comercial, pero también por la ausencia de una política económica y agrícola dirigida a superar los rezagos productivos y sociales. Los subsidios directos no han resuelto el problema del ingreso y la productividad, por lo que buena parte de los productores permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad social: de los más de 400 000 productores rurales, paradójicamente 74 644 viven de otra actividad, más de 23 000 subsisten con apoyo gubernamental y 4293 viven del envío de remesas de Estados Unidos.¹¹

El diagnóstico sobre la agricultura que hace el actual gobierno de Chiapas se resume de la manera siguiente:

Los problemas que aquejan al sector agrícola y a los productores en particular, entre otros son: escasos subsidios agrícolas, limitada adopción de la tecnología transferida, condiciones geográficas y orográficas desfavorables, vulnerabilidad ante las contingencias climatológicas, riesgos de introducción de plagas y enfermedades en los cultivos por la vulnerabilidad de la frontera sur, alto índice de migración, suelos erosionados, pérdida de fertilidad de los suelos, alta

¹⁰ Cálculos propios realizados a partir del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008.

¹¹ INEGI, 2008b, cuadro 128.

marginación social y económica, escaso acceso a financiamientos y garantías líquidas, elevado intermediarismo para la comercialización de productos y bajo desarrollo de infraestructura para la producción primaria, transformación y valor agregado, los cuales a su vez representan retos de altas dimensiones para su atención (Gobierno del Estado de Chiapas, 2013: 127).

En congruencia con este diagnóstico, las políticas deberían atender cada uno de los factores indicados, comenzando por redefinir el papel del gobierno en la inversión en aspectos estratégicos como la infraestructura, la tecnología y asistencia técnica, la comercialización, el financiamiento, la contención de la erosión del suelo agrícola y el incremento de subsidios que protejan a los productores frente a las grandes empresas comercializadoras y sus agentes intermediarios. Un tema ausente en el diagnóstico es el problema de la estructura agraria y los conflictos localizados en varias regiones del estado que no proporcionan un clima favorable para el desarrollo de la producción. El éxodo rural tampoco tiene un planteamiento vinculante con el compromiso de un desarrollo rural que proporcione empleo a los jóvenes y evite la migración forzada.

La visión del Plan Estatal de Desarrollo está fincada en el modelo neoliberal, en criterios de rentabilidad económica. Este espíritu está plasmado en los llamados ejes rectores, uno de los cuales es el “Chiapas exitoso”. En una parte del texto dice:

Proyecta el desarrollo económico integral y sustentable del estado a partir de la modernización del campo, del estímulo a las empresas e industrias, de la generación de empleos y de la consolidación del turismo como motor de prosperidad.

Un campo moderno es un campo de calidad y competente que promueve la inversión y brinda a los productores herramientas y conocimientos para impulsar la producción, generar mayores ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. *Chiapas exitoso detona los factores de producción, para un campo rentable que permita posicionar los productos dentro y fuera del territorio* (Gobierno del Estado de Chiapas, 2013: 11, cursivas nuestras).

Como se puede ver, no se parte del reconocimiento de las diferencias existentes en el campo entre productores, regiones y productos. No todo está orientado al

mercado y, por lo tanto, no se puede hablar, en general, de “posicionar los productos dentro y fuera del territorio”.

Chiapas se encuentra frente a un problema económico que genera efectos sociales adversos: la inversión de los empresarios y productores chiapanecos, tanto del campo como de la ciudad, es muy escasa; el Estado no invierte para generar fuentes de empleo, se limita a transferir algunos subsidios; y la inversión extranjera, que podría suplir a la inversión local y nacional privada, no es atraída por la entidad. De esta manera, la baja inversión se convierte en una traba para el desarrollo económico y para la generación de empleos de calidad.

La localización del capital internacional refleja la asimetría regional en el país, pues aquél busca las mejores condiciones de ubicación con respecto a los mercados, infraestructura y mano de obra calificada. En la última década la Inversión Extranjera Directa (IED) se concentró en el centro del país, en especial en dos entidades, el Distrito Federal y el Estado de México: en el año 2000 reunieron ambas el 52.4% de la IED que llegó al país; en el 2002 subió al 72.4%; en el 2004 mantiene la misma proporción; en 2006 baja al 56.4%, y en 2008 disminuye un poco menos al concentrar únicamente el 54.3%, para cerrar en 2010 con un 39.7%.¹²

Después de estas entidades, el norte ocupa un lugar significativo en las preferencias del capital extranjero, sobre todo en los estados fronterizos, como Baja California, Chihuahua y Nuevo León, donde se localiza buena parte de la industria maquiladora. Estos estados concentraron en el año 2000 el 25% de la IED; sin embargo, en los años posteriores su participación relativa bajó a un promedio de 13%, aumentando significativamente en 2010 en cerca del 36% (ver cuadro 3).

¹²La concentración de la IED es un fenómeno que se observa desde años atrás, así lo demuestran algunos estudios: “El análisis de la IED muestra una tendencia a la mayor concentración de la inversión extranjera directa en el Distrito Federal y en la frontera norte del país, lo que conforma un corredor industrial centro-norte y que lleva a una mayor integración centro-norte de México con el sur y suroeste de Estados Unidos donde se encuentran ubicados proveedores y mercado de las firmas. Industrias como la automotriz y la electrónica se han beneficiado de la complementariedad geográfica de ambas regiones” (Correa y Villarreal, 1999: 229).

Cuadro 3. Inversión extranjera directa total y estados seleccionados.
Millones de dólares

País/estados	2000	2002	2004	2006	2008	2010
País	18 298.0	23 986.9	25 037.6	20 698.6	28 336.7	23 027.4
NORTE	4 584.7	3 792.3	3 162.3	4 502.3	5 010.8	8 241.5
Baja California	986.2	1 011.8	1 014.8	960.2	1 555.0	941.2
Chihuahua	1 209.5	584.6	677.4	1 541.6	1 481.0	1 920.6
Nuevo León	2 389.0	2 195.9	1 470.1	2 000.5	1 974.8	5 379.7
CENTRO	9 589.3	17 383.3	18 075.9	11 677.9	15 387.5	9 148.3
Distrito Federal	9 044.1	16 607.2	14 499.1	10 284.6	13 753.2	7 987.0
Estado de México	545.2	776.1	3 576.8	1 393.3	1 634.3	1 161.3
SUR	107.9	184.5	259.6	187.3	71.8	9.6
Campeche	11.4	72.4	47.7	10.6	-17.1	-26.9
Chiapas	2.2	2.2	12.0	24.4	-11.2	15.4
Guerrero	11.7	15.8	25.0	34.6	1.5	-24.1
Oaxaca	-0.1	4.5	3.0	10.7	17.7	8.7
Tabasco	38.9	75.8	150.9	77.2	46.6	31.0
Yucatán	55.5	13.8	21.0	29.8	34.3	5.5

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección de Inversión Extranjera.

Finalmente, los seis estados del sur incluidos en el cuadro 3 han tenido una participación marginal en el monto global de IED. Durante la última década, 2004 fue el año en que se vio más favorecida la región, cuando llegó a poco más de 259 millones de dólares, cifra que representó el 1% del total. En este contexto, Chiapas no ha sido considerado de interés para la IED, situación que añade otro factor en el escaso crecimiento de su economía. Como se observa en el mismo cuadro, en tiempos de crisis la inversión se hace todavía más precaria; es así que en 2008 disminuyó en poco más de 11 millones de dólares, mientras que en Guerrero se retiraron más de 24 millones de dólares en 2010. El estado con mayor IED fue Tabasco, sobre todo por la actividad petrolera. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (2014), en 2010 la IED en Chiapas fue de 15.4 millones de dólares, en 2011 se registró un monto de 200 mil dólares, en 2012 se reporta la cantidad de 46.1 millones de dólares, es decir, 0.26% del total nacional, para cerrar en 2013 con 39.5 millones. En resumen, la IED acumulada en Chiapas durante el periodo 2000-2013 fue de 182.7 millones de dólares, monto que representa un 0.1% del flujo total que llegó a México.

Migración, precarización laboral y pobreza

La falta de dinamismo económico, así como las tendencias en el cambio de la estructura económica, cuyo rasgo principal es la preponderancia creciente del comercio y los servicios, ha alentado a que la población se movilice en la búsqueda de mercados laborales, uno de ellos la migración hacia los Estados Unidos, con todas las consecuencias económicas, sociales, culturales y políticas que esto conlleva. Encontramos una economía campesina en franca descomposición, que cada vez menos logra satisfacer las necesidades alimentarias y de ingreso, por lo cual se tiene que recurrir a los mercados laborales en Estados Unidos.

Durante la década de 1970, las actividades primarias constituían el principal motor que movía la economía. En ese año, poco más del 72% de la población era rural¹³ y la población económicamente activa (PEA) dedicada a las actividades agropecuarias y forestales sumaba 293 152 personas, representando el 73% del total de la entidad. En 1970, este sector aportaba el 31% del PIB, el secundario un 27.7%, y el terciario 41.2%. Desde entonces, las actividades de comercio y servicios se proyectaban como las de mayor peso en la composición del PIB (INEGI-PNUD, 1986). Casi cuarenta años después, en 2009, el sector primario sólo representó un 9.3% del PIB de Chiapas, aunque la PEA vinculada a estas actividades alcanzó el 37.2% del total. ¿Qué significa este dato? En primer lugar, que otros sectores adquirieron mayor importancia relativa y, segundo, una caída de su producción y productividad, que se traduce en la incapacidad para generar suficientes empleos, ingresos y alimentos para una población en crecimiento.

Por otra parte, el mapa agrario de 1970 mostraba una profunda desigualdad en la dotación de tierras. Una proporción significativa de las tierras censadas estaban en manos privadas, encontrándose propiedades de cinco mil y más hectáreas, frente a la existencia de minúsculas parcelas tanto en el sector privado como en el social. De acuerdo con el censo agrícola, ganadero y ejidal de ese año, 2 096 000 hectáreas se localizaban en el sector privado; de éstas, medio millón estaban en manos de 476 propietarios, que sólo representaron el 1.7% del total. Por su parte, los ejidos y comunidades poseían 2 667 000 hectáreas, es decir, el 56% de la superficie censada. La diferencia sustantiva con el sector privado residía no tanto en la superficie total,

¹³ Si se toma como criterio de ruralidad a las localidades menores de 5000 habitantes tendríamos que la población rural de ese año fue del 75.6%, debido a que sólo 382 052 personas vivían en las localidades de 5000 y más habitantes (Villafuerte *et al.*, 1999).

sino en el tamaño de las parcelas, pues mientras en la propiedad social se trataba de pequeñas extensiones, en el sector privado se encontraban grandes extensiones en muy pocas manos, aunque también se podía ver en el sector privado gran cantidad de parcelas de hasta diez hectáreas (Villafuerte, 2001: 195).

El censo ejidal de 2007 muestra un mapa agrario radicalmente distinto al de 1970. Ahora 4 442 154 hectáreas están distribuidas en 2824 ejidos y comunidades agrarias.¹⁴ Es decir, casi el doble de la superficie se encontraba en manos del sector social; sin embargo, la pobreza y la marginación en el campo tienen los niveles más altos del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La estructura agraria actual es producto de una larga lucha de los campesinos y sus organizaciones por obtener un pedazo de tierra. En buena medida sus aspiraciones se han cumplido; pero como la población ha crecido, la dotación individual se ha reducido y esto provoca la fragmentación de la tierra. Por ejemplo, la PEA vinculada al campo en 1970 era de 293 152 personas y en 2009 sumaban 643 628, es decir, un incremento del 119%. Por otra parte, además de la segmentación de la tierra se ha producido una pérdida de fertilidad, la deforestación y la erosión se han extendido, factores que inciden de manera determinante en los rendimientos y la producción. Además, la política agrícola de los últimos gobiernos no se ha orientado a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, sino que ha respondido a las exigencias del mercado, definidas por la producción, la productividad y las ganancias. En este sentido, se podría decir que la política agrícola y la política social se han orientado a la administración de la crisis más que a la superación de la misma.

La concentración de la tierra en pocas manos generó en los años setenta un vigoroso movimiento agrario en varios puntos de la entidad, particularmente en las zonas de Venustiano Carranza, Simojovel y parte de la Selva. La construcción del complejo hidroeléctrico sobre el río Grijalva, así como la construcción de obras en la zona norte de Chiapas y el estado de Tabasco, aunado al proyecto turístico de Cancún, alivió la presión sobre la tierra y el empleo en el estado.

Una vez concluida la infraestructura turística y de la industria petrolera, particularmente en Tabasco, Chiapas comienza a expulsar población hacia los estados del centro y norte del país. Ya en los noventa, con la profundización de las políticas neoliberales, el campo comienza una fase de progresivo empobrecimiento y los reducidos mercados laborales se constriñen aún más, incluso en otros estados del país, por lo que los chiapanecos, deslumbrados por el espejismo del dólar, comienzan a emigrar hacia Estados Unidos.

¹⁴Véase INEGI, 2008a, cuadro 37.

Las migraciones internacionales en Chiapas comienzan a cobrar forma sistemática en 1990. La pregunta central es por qué comienzan en ese momento y no años atrás, como en otros estados del centro y norte del país. Si la causa más importante es la pobreza, la pregunta sería: ¿por qué los chiapanecos, padeciendo una pobreza secular, no habían emigrando antes a los Estados Unidos? Este es uno de los argumentos de quienes sostienen la debilidad del vínculo entre pobreza y migración internacional.

Una hipótesis plausible es que durante los años ochenta las condiciones de reproducción social en Chiapas y en los estados del sur de México no se habían agotado para los migrantes chiapanecos, quienes se dirigían a los principales centros urbanos dentro y fuera del estado. No obstante, a partir de 1990 se articulan varios fenómenos que estaban ya presentes años atrás: la conclusión del reparto agrario y la fragmentación de la tierra; la crisis agrícola, resultado de las políticas neoliberales que restringen los apoyos crediticios, insumos y asistencia técnica a los pequeños productores y campesinos; la profundización de la pobreza; así como la conflictividad política y religiosa que alcanza niveles álgidos poco después del levantamiento del EZLN. A este entorno hay que añadir dos fenómenos que actuaron como catalizadores de la migración internacional: la crisis de los precios internacionales del café, que dejó en la ruina a miles de productores, y los efectos de los huracanes Mitch en 1998 y Stan en 2005.

En los últimos años los temas de migración internacional y pobreza han cobrado centralidad en la agenda de investigación de muchas universidades y centros de investigación, organismos multilaterales y organismos no gubernamentales. Durante muchos años los análisis de la migración internacional y los de pobreza siguieron su propio camino. Sin embargo, recientemente han comenzado a publicarse trabajos que abordan de manera directa y con rigor la relación entre pobreza y migración internacional. Entre estos destaca el libro *Pobreza y migración internacional*, coordinado por Agustín Escobar (2007). En varios capítulos, pero sobre todo en el escrito por René Zenteno, se reconocen las investigaciones pioneras que refieren la correspondencia entre la migración y la pobreza, tal es el caso del antropólogo Manuel Gamio en los años treinta y más recientemente Bustamante (1975), Cornelius (1979) y Arizpe (1983). Pero en todo caso, la conclusión más aceptada consistía en reconocer que los migrantes sí eran pobres, pero no los más pobres, pues se requería de una suma importante de dinero para realizar el viaje. Sin embargo, para algunos la pobreza no era tan importante para marcharse como el acceso a redes migratorias donde podían vincularse pobres y no pobres.

En la era de las nuevas migraciones Chiapas puede ser un caso ilustrativo del vínculo entre migración y pobreza. La creciente migración internacional en las regiones más pobres de la entidad como la Sierra y Los Altos, como hemos ilustrado en algunos estudios (Villafuerte y Mansilla, 2010), demuestra que, efectivamente, es más importante el acceso a las redes migratorias que el dinero. Pero además, en las propias comunidades indígenas hay quienes se dedican al negocio de los préstamos para financiar el viaje hacia el norte (Rus y Rus, 2008; Coporo, 2013).

¿Las remesas pueden superar la pobreza? El acelerado crecimiento que han tenido las remesas a partir del año 2000 ha llevado al Banco Mundial y al Banco Interamericano a postular a éstas como una palanca del desarrollo. Varios estudios del fenómeno migratorio han planteado la insostenibilidad de esta tesis basada en una concepción errónea del concepto de remesa y del desarrollo (Wise y Márquez, 2007; García, 2009). En efecto, las evidencias empíricas en las entidades que tienen mayor recepción de remesas muestran que las condiciones de vida de la población siguen siendo muy precarias: Zacatecas, Puebla, Estado de México y Veracruz, entre otras.

La información del Banco de México, correspondiente a 2008, permite corroborar lo anterior. En este año el monto de las remesas en México alcanzaron 26 137 millones de dólares, el 45% por arriba del valor de la balanza petrolera.¹⁵ La lista de entidades con mayor cantidad de remesas la encabeza, en orden de importancia, Michoacán, y le siguen Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, que aportaron más del 40% del total nacional. Sin embargo, existe un selecto grupo de ocho entidades cuya aportación a las remesas totales está cerca del 32%. La relevancia de este grupo radica en que la proporción de las remesas que reciben con relación a su PIB es de las más altas: por ejemplo, las remesas en Michoacán representan el 10.6% de su PIB, le sigue Oaxaca con un 8.8%, Zacatecas con 8.4%, Guerrero con 8.1%, Hidalgo con 6.7%, Nayarit con 6.3%, Tlaxcala con 5.2%, y finalmente Chiapas con 4.5%. El parámetro que sirve para ver la importancia de estas entidades es la media nacional que se ubicó en 2.3% (Banco de México, 2009: 51).

Otra forma de ver la relevancia de las remesas familiares en las entidades federativas es en relación con los salarios. Según las estimaciones del Banco de

¹⁵ Gracias a los buenos precios del petróleo en 2008, las exportaciones en 2008 alcanzaron los 50 656 millones de dólares; a esta cantidad hay que restarle las importaciones, de tal manera que la balanza comercial petrolera sumó 14,383 millones de dólares, muy por abajo del monto de las remesas familiares (Banco de México, 2008: 44, cuadro 12).

México, las entidades referidas anteriormente ocupan los primeros lugares. Por ejemplo, el monto de las remesas en Oaxaca ocupa el primer lugar, al representar el 166% con relación a la masa salarial del sector formal de su economía, siguen Guerrero y Michoacán, y en el sexto lugar se encuentra Chiapas, donde las remesas representaron el 89% de la masa salarial del sector formal.

Chiapas forma parte del selecto grupo de entidades federativas donde las remesas tienen un peso significativo en la economía familiar y, dado el grado de desarrollo económico y social de esos estados, se convierten en un medio de vida fundamental. De acuerdo con los datos del Banco de México, durante el periodo 1995-2008 Chiapas pasó de ocupar el lugar veintisiete al sitio once en la lista de estados que reciben remesas. Esto da una idea bastante clara sobre el grado de dependencia que comienza a tener el estado respecto a los dólares de la migración; de manera que cuando se produce una baja en el monto, como ha venido ocurriendo desde 2008, cuando se alcanzó la cifra de 800 millones de dólares, hasta llegar a los 535 millones en 2013, se incrementan los conflictos sociales, tal como hemos mostrado en apartados anteriores. Si comparamos el monto obtenido en 2007, previo a la crisis, que fue de 906.6 millones de dólares, con lo captado en 2010 cuya suma fue de 535 millones de dólares, veremos una caída de casi un 41%, equivalente a 372 millones de dólares. Esta caída significó poco más de siete veces del presupuesto asignado al sector agropecuario, forestal y pesquero en 2012, que fue de 657.5 millones de pesos (Gobierno del Estado de Chiapas, 2012: 61).

Es evidente que las remesas no han logrado superar la pobreza. Los casos más graves son, en orden de importancia, Chiapas, Guerrero y Oaxaca en los tres ámbitos de pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio. Chiapas constituye el paradigma donde los indicadores de desarrollo social se convierten en parámetro para medir la desigualdad en el país. Llegamos al siglo XXI con un enorme rezago social que hace posible comparar a Chiapas con los países más atrasados de África. Por ejemplo, el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más es casi tres veces superior al promedio nacional y más de ocho veces con respecto al Distrito Federal. La proporción de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es casi del doble con respecto al promedio nacional y cerca de cuatro veces más con relación al Distrito Federal; en este mismo grupo encontramos que más del 64% de la población tiene primaria incompleta, mientras que el promedio nacional ronda en el 46% y el Distrito Federal en poco más del 28%.

En el ámbito sanitario hay dos indicadores que llaman la atención: se trata de la población que no es derechohabiente de las instituciones de salud, que alcanza una proporción mayor al 76%, equivalente a casi 3 300 000 personas. El

promedio nacional ronda en 50%, y para el Distrito Federal está por arriba del 42%. Finalmente, las viviendas que carecen de agua entubada superan el 27%, mientras que el promedio nacional es de 11% y para el Distrito Federal no llega al 2%. Esta es una de las grandes paradojas de Chiapas, ya que siendo una de las entidades que tiene mayor disponibilidad de agua en el país no cuenta con una red que permita el acceso universal al agua entubada, lo que muchas veces se traduce en un costo social y económico enorme por la disputa del recurso y el tiempo que hay que dedicar al acarreo.

Como se puede ver en el cuadro 4, en todos estos indicadores Chiapas se encuentra por abajo del promedio nacional. Nos llaman mucho la atención tres aspectos que están íntimamente relacionados con la expectativa de vida: el acceso a los servicios de salud, donde más de la mitad de la población carece de este fundamental servicio; la seguridad social, cuya carencia llega a rebasar el 85%, y el acceso a la alimentación donde más de un millón de personas padece hambre; una gran paradoja que sólo es posible entender desde una visión histórica donde a amplios sectores de la población campesina e indígenas se les ha negado el acceso a los satisfactores fundamentales. Estos indicadores muestran una radiografía del Chiapas del siglo XXI, con profundas desigualdades económicas y sociales que no será posible superar con la actual estructura y dinámica económica, como tampoco con la serie de programas sociales instaurados desde los gobiernos federal y estatal.

Cuadro 4. Pobreza multidimensional, 2008

Indicadores de incidencia	Nacional		Chiapas	
	Porcentaje	Millones de personas	Porcentaje	Millones de Personas
Indicadores de carencias sociales ¹				
Rezago educativo	21.7	23.16	37.8	1.69
Acceso a los servicios de salud	40.7	43.38	52.1	2.33
Acceso a la seguridad social	64.7	68.99	85.3	3.81
Calidad y espacios de la vivienda	17.5	18.62	38.2	1.71
Acceso a los servicios básicos de la vivienda	18.9	20.13	36.3	1.62
Acceso a la alimentación	21.6	23.06	26.3	1.17

¹ Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

La crisis económica reciente, que alcanzó su más alto nivel en 2009, es un factor adicional que impacta en las condiciones de vida de la población; sólo en el rubro de remesas, las familias con migrantes dejaron de recibir 372 millones de dólares al 2013. Dos indicadores son muy sensibles a la crisis: se trata del nivel de ingresos y de la calidad del empleo. En efecto, en 2009, un año particularmente crítico para la economía del país, en Chiapas encontramos que el 15.9% de la población ocupada no tenía ingresos, mientras que el 33.2% declaró ingresos de hasta un salario mínimo y el 24.8% ganaba hasta dos salarios mínimos. La suma de estos tres sectores revela que el 73.9% de la población trabajadora todavía se encontraba en condiciones de alta vulnerabilidad laboral.

Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se puede afirmar que las condiciones laborales en Chiapas no han cambiado a lo largo de los últimos diez años; por el contrario, se percibe una tendencia hacia una mayor precarización. En el 2000, la población ocupada sin prestaciones alcanzaba más del 85% y en 2009 era de casi 84%; sin embargo, en este último año el empleo informal alcanzó a 400 891 personas. A pesar de que el momento más álgido de la crisis ya pasó, la informalidad sigue creciendo, de manera que en el último trimestre de 2013 la ENOE registró una población de 439 039 personas en el sector informal, equivalente al 23% de la población ocupada que fue de 1 912 094 personas.¹⁶

La precarización también se refleja en otros estratos de ingreso: los que ganaban de dos a cinco salarios mínimos pasaron de representar 6.22% a 3.49% y los que tuvieron un ingreso mayor a cinco salarios mínimos y hasta diez, pasó de significar 1.47% a 0.67%. Estos datos muestran claramente el proceso de pauperización de la fuerza laboral en el sector agropecuario. Otro dato muy revelador de la precariedad laboral en Chiapas es que sólo el 10.4% de la PEA se encuentra en los registros del Seguro Social.¹⁷

La pobreza, el desempleo y la precarización laboral harán que la migración internacional alcance nuevo impulso una vez que la economía de los Estados Unidos comience a mostrar signos de recuperación, a pesar de la Ley Arizona, del incremento en el número de elementos de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, y de otras medidas de control que están por venir en la frontera

¹⁶ Consultado en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html

¹⁷ Véase Instituto Mexicano del Seguro Social, Memoria estadística 2009.

México-Estados Unidos,¹⁸ en el contexto de la reforma migratoria que por ahora se encuentra en un *impasse*.

A manera de conclusión

La información y los datos aportados dibujan una realidad muy compleja para Chiapas. La presencia de una importante población indígena y campesina en condiciones de alta vulnerabilidad, sin educación, carente de tierra y preparación para vincularse a los mercados laborales, constituye uno de los principales problemas sociales que enfrenta la entidad. Asimismo, la existencia de una población mayoritaria de jóvenes que no tiene alternativas de trabajo y tampoco de estudio convierte a Chiapas en un estado poco viable en términos de un desarrollo con justicia. Un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo de calidad, que tampoco otorga buenos salarios y prestaciones, no contribuye a crear un mercado interno vigoroso. La debilidad del sector empresarial de la entidad se refleja en la ausencia de iniciativas y proyectos de escala.

La irrupción del EZLN en el escenario chiapaneco obligó al gobierno a poner en marcha el mini “Plan Marshall” del cual surgió en 1995 el fideicomiso “Fondo Chiapas” con la participación de varias empresas dispuestas a invertir en Chiapas, siempre y cuando se establecieran las debidas garantías; sus resultados, sin embargo, fueron de muy bajo impacto (Villafuerte, 2003: 91). Con la llegada al poder de Vicente Fox en el país y Pablo Salazar en Chiapas, se establecieron los macroproyectos Plan Puebla-Panamá y Marcha hacia el Sur. El gobierno de Chiapas desplegó una intensa campaña en el extranjero para convertir a Chiapas en “Tierra de Oportunidades”. Tenía que borrar el estigma de los gobiernos interinos que le precedieron, hostiles al zapatismo. Salazar logró establecer una convivencia pacífica con el zapatismo, incluso convenció a Fox para que la marcha zapatista al Distrito Federal se realizara sin ningún tipo de hostigamiento. A pesar de todo, el capital nacional y extranjero se mostró cauteloso y no pisó tierras chiapanecas.

Chiapas no despegó en su economía: no estaban dadas las condiciones para recibir a la inversión privada nacional y extranjera. En cambio, durante el régimen

¹⁸ En el país se observa una desaceleración en la emigración internacional: durante el periodo 2006-2007 y 2007-2008 se registra una disminución de 5 puntos, al pasar de 8.7 a 3.3 por cada mil habitantes. Los casos de mayor desaceleración fueron Michoacán con 20 puntos, Zacatecas con 17 y Guanajuato con 17 puntos; la estimación para Chiapas es de 7 puntos (INEGI, 2010b).

de Pablo Salazar la migración a los Estados Unidos creció de manera extraordinaria: al término del primer año de gobierno las remesas superaron los 223 millones de dólares y al finalizar su administración, en 2006, ya sumaban 800 millones, un incremento de casi un 260%. La apertura hizo que el comercio y los servicios crecieran, y los principales impulsores fueron el turismo y la disponibilidad de recursos provenientes de las remesas familiares. Por eso no resulta extraño que durante el periodo 2003-2008 el crecimiento de la economía se diera en el sector terciario, en tanto que el primario y el secundario presentaron retrocesos. En otras palabras, el gran beneficiario de las remesas no fue el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes, sino el comercio.

Chiapas fue el último espacio en ser descubierto por el capital comercial. Muchas de las franquicias que operaban desde hace muchos años en otras entidades del país comenzaron a hacer negocios en Chiapas. El consorcio Wall-Mart es de los más importantes: Sam's Club, Aurrerá, El Portón, Vips; también operan otros capitales como Sears, Sanborn's, Soriana, Chedraui, Telcel, franquicias de comida rápida como Kentucky, Pizza Hut, Dominos Pizza, Pollo Campero, McDonalds, Burger King y, en tiempos más recientes, surgieron como hongos las tiendas Oxxo que están desplazando a los pequeños establecimientos familiares. Chiapas se está globalizando, y en esa medida la pobreza ha venido creciendo.

Por su parte, el campo no logró la reconversión para insertarse en los nuevos requerimientos de los mercados nacional e internacional. Su estructura productiva sigue centrada en cinco cultivos: maíz, café, caña de azúcar, plátano y mango. Aun con todo, las áreas tradicionales de producción de maíz, de alto potencial, entraron en crisis. La mayor parte de la tierra sigue ocupada por la ganadería bovina extensiva, ahora en manos, mayormente, de los campesinos y pequeños propietarios. Es un campo descapitalizado y erosionado por las políticas neoliberales. La racionalidad económica que sigue imperando en el sector privado está basada en una lógica extractiva que se traduce en la mínima inversión y esfuerzo con la mayor ganancia posible.

La ruina de miles de pequeños productores de café, provocada por el derrumbe de los precios internacionales, produjo las primeras oleadas de migrantes a Estados Unidos. Luego seguiría la crisis agrícola y agraria en casi toda la geografía chiapaneca, que frente a un Estado carente de una política económica y social para retener a los campesinos en sus lugares de origen, generó el aumento de la migración a Estados Unidos ya iniciada por los pequeños cafecultores. Hoy, una parte de los chiapanecos se mueve entre el sueño zapatista y el sueño americano. Uno intenta construir un proyecto autónomico, centrado en las aspiraciones de

los pueblos indios, el otro se relaciona con la migración de miles de chiapanecos que intentan llegar a los Estados Unidos para trabajar y resolver sus problemas de supervivencia.

No importan las barreras físicas y humanas, así como la construcción de bardas y el aumento de la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Estados Unidos, que se duplicará con la reforma migratoria. En palabras del senador republicano por Arizona John McCain, la línea fronteriza será la “más militarizada desde la caída del muro de Berlín” (Sin embargo, 2013), con un costo de 30 000 millones de dólares. El hambre, la necesidad de un empleo y el deseo de probar suerte en un lugar que no sea la comunidad de origen impulsan al migrante a mirar hacia el norte. Los últimos años de crisis económica en los Estados Unidos provocaron una disminución en la migración, pero una vez superada la situación es de esperarse un repunte. Según la información del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal de 2007, en el 20% de las unidades productivas los jóvenes han emigrado.

Hoy tenemos en Chiapas una realidad mucho más compleja, a pesar de que el nivel de beligerancia del EZLN ha bajado considerablemente. Los reportes cotidianos sobre la conflictividad entre comunidades, sobre todo en la llamada zona de influencia zapatista, las detenciones de migrantes centroamericanos que a diario cruzan la frontera, la migración de chiapanecos a Estados Unidos, el desempleo, la precariedad laboral, la violencia que ejerce la delincuencia, así como la ausencia de una economía en crecimiento, proyectan un panorama sombrío.

La economía ha seguido la senda de las políticas neoliberales que se aplican en todo el país. En estados como Chiapas, carentes de un aparato productivo y de infraestructura, el resultado ha sido un progresivo abandono del campo, el crecimiento de la economía informal, la precarización laboral y el surgimiento de la nueva pobreza. Es una sociedad más diferenciada y con mayores paradojas. En medio de esta serie de contradicciones, hoy estamos en camino a la segunda fase del neoliberalismo, caracterizada por el neoextractivismo que tiene como eje proyectos mineros, construcción de hidroeléctricas y el impulso de cultivos para la producción de agrocombustibles, que profundizarán los conflictos sociales y la destrucción de amplios territorios.

¿Qué hacer? Como hemos visto, hay muchos problemas que resolver; sin embargo, deberán establecerse prioridades. Una de ellas es el campo con su amplia gama de aspectos: agrarios, productivos, créditos, comercialización, organización, infraestructura, industrialización, asistencia técnica, etcétera. La pobreza y la marginación constituyen dos temas íntimamente relacionados con la justicia, con la democracia, con la distribución del ingreso y el acceso a los satisfactores

fundamentales: salud, educación y empleo. La idea es revolver los problemas del presente con una mirada de largo plazo.

Referencias bibliográficas

- Aranda, Jesús y Vélez, Ascencio (2012), "Envían al senado controversia por nuevo municipio en los Chimalapas". En *La Jornada*, 8 de febrero.
- Arizpe, Lourdes (1983), "El éxodo rural en México y su relación con la migración a Estados Unidos". En *Estudios Sociológicos*, vol. 1, núm. 1, pp.9-33.
- Ascencio Franco, Gabriel (2008), *Regularización de la propiedad en la Selva Lacandona: cuento de nunca acabar*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Banco de México (2009), *Informe anual 2008*. México: Banco de México.
- Bustamante, Jorge (1975), *Espaldas mojadas: materia prima para la expansión del capital norteamericano*. México: El Colegio de México.
- CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) (2008), *Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008*, México: CONEVAL.
- Cornelius, Wayne (1978), "La migración ilegal mexicana a los Estados Unidos: conclusiones de investigaciones recientes, implicaciones políticas y prioridades de investigación". En *Indocumentados: mitos y realidad*. México: El Colegio de México, pp. 69-109.
- Correa, María Antonia y Diana Villarreal (1999), "Distribución regional de la inversión extranjera directa y comercio exterior en México, 1998-1994". En Rodríguez, Salvador, Jorge Serrano y Alberto Javier Villar (coords.), *Desarrollo regional y urbano en México a finales del siglo XX. Una agenda de temas pendientes*, t. III. México: AMECIDER, Instituto de Investigaciones Económicas-Facultad de Planeación Urbana y Regional (UAEM), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM, pp. 223-244.
- Coporo, Gonzalo (2013), *Migración, pobreza y desarrollo: estudios de casos en dos localidades del municipio de Chamula en Los Altos de Chiapas*. Tesis doctoral, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
- Cuarto Poder* (2010), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 12 de julio.
- Delgado, Raúl y Humberto Márquez (2007), "Repensar la relación entre migración y desarrollo a partir del caso de México". En *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, vol. V, núm. 2, pp. 8-25.
- El Heraldillo de Chiapas* (2010), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de julio.
- Escobar, Agustín (2007), *Pobreza y migración internacional*. México: CIESAS.

- García, Rodolfo (s.f.), *Desarrollo económico y migración internacional: los desafíos de las políticas públicas en México*. Tesis de doctorado en Estudios del Desarrollo-Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
- Gobierno del Estado de Chiapas (2012), *Anexo estadístico 2 del sexto informe de gobierno*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Gobierno del Estado.
- Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (2012), *Anexo estadístico del sexto informe de gobierno*. México: Presidencia de la República.
- Henríquez, Elio (2013), "Gobierno retomó el control de Carranza". En *Cuarto Poder*, 11 de mayo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- INEGI (2006), *II Censo de población y vivienda 2005*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2008b), *VIII Censo agrícola, ganadero y forestal 2007*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2008a), *IX Censo ejidal*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2010d), *Sistema de cuentas nacionales de México. Producto interno bruto por entidad federativa 2003-2008*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2010a), *Censos económicos 2009. Tabulados básicos*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2010b), "Saldo neto migratorio internacional de México con tendencia decreciente". Comunicado No. 236/10, 12 de julio, Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI (2010c), *Anuario estadístico por entidad federativa*. Aguascalientes, México: INEGI.
- INEGI-PNUD (1986), *Estructura económica del Estado de Chiapas. Sistema de cuentas nacionales de México*. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.
- INM (2007), *Publicación del Instituto Nacional de Migración*, año 5, núm. 5, enero, México.
- Instituto Mexicano del Seguro Social (2010), *Memoria Estadística 2009*. México: IMSS.
- La Jornada* (2010), México, 7 de julio.
- Libert, Antoine (2012), *Dialógicas del territorio en Chiapas: un análisis sistémico-complejo del Proyecto Mesoamérica*. Tesis de maestría en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma Chapingo, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- Mondragón, Ana Laura (2013), "Niegan grupos armados en la Sierra de Mariscal". En *Cuarto Poder*, 7 de marzo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
- Rus, Jan y Diana Rus (2008), "La migración de trabajadores indígenas de Los Altos de Chiapas a Estados Unidos, 2001-2005: el caso de San Juan Chamula". En Villafuerte, Daniel y María del Carmen García (coords.), *Migraciones en el sur de México y Centroamérica*. México: UNICACH-NCCR-Flacso Costa Rica-OIM, Miguel Ángel Porrúa Editor, pp. 343-382.
- Secretaría de Desarrollo y Participación Social (2010), Disponible en: http://www.desarrollosocial.chiapas.gob.mx/28_municipios_menor_IDH/antecedentes.php
- Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera, Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (2014), *Informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera en México (enero-diciembre de 2013)*. Disponible en: <http://www.economia>

gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/informe_congreso_enero_diciembre_2013.pdf.

- Sin embargo*, redacción (2013), “La frontera México-EU será la más militarizada desde la caída del Muro de Berlín, ofrece el Senador McCain”. En *Sin embargo.mx*. Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/25-06-2013/666831>.
- Villafuerte Solís, Daniel y María del Carmen García Aguilar (2005), “Las fronteras de la frontera sur”. En Basail, Alain (coord.), *Fronteras des-bordadas. Ensayos sobre la Frontera Sur de México*. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Juan Pablos Editor.
- Villafuerte Solís, Daniel y Elizabeth Mansilla (2010), *Vulnerabilidad y riesgos en la Sierra de Chiapas: Dimensiones económica y social*. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Villafuerte Solís, Daniel (2001), *Integraciones comerciales en la frontera sur. Chiapas frente al Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica*. México: Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste-Universidad Nacional Autónoma de México.
- Villafuerte Solís, Daniel (2003), “Chiapas: las fronteras del desarrollo”. En *Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos*, vol. I, núm. 1, pp. 26-46.
- Villafuerte Solís, Daniel, et al. (1999), *Sistema de Ciudades de Chiapas. Un enfoque socioeconómico y demográfico*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
- Zenteno, René (2007), “Pobreza, marginación y migración mexicana a Estados Unidos”. En Escobar, Agustín (coord.), *Pobreza y migración internacional*. México: CIESAS.